

ACTA DE DELIBERACIÓN RIT 412-2023

Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Esta Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, reunida después del debate de rigor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, ha resuelto, por votación unánime, **ABSOLVER** a los acusados que se indicarán, de las imputaciones que en cada caso se señalan:

1.- **CAMILO SAMMY SANDOVAL GODOY**, como autor del delito de **apertura de giros presentando datos o antecedentes falsos al Servicio de Impuestos Internos**, previsto y sancionado en el artículo 97 N° 23 del Código Tributario.

2.- **DAVID ENRIQUE MILLALÉN LLANCAO**, como autor de los delitos de **asociación ilícita**, tipificado y sancionado en los artículos 292 y 294 del Código Penal y **tenencia ilegal de municiones**, tipificado y sancionado en los artículos 2 letra c) y 9 de la Ley 17.798.

3.- **GERMÁN DEL CARMEN DUARTE PEREIRA**, como autor de los delitos de **asociación ilícita**, tipificado y sancionado en los artículos 292 y 294 del Código Penal, **receptación**, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal y **estafa** previsto y sancionado en el artículo 467 N° 1 del Código Penal.

Asimismo, se ha resuelto, **CONDENAR** a **YERKO ANDRÉS SILVA TORO, ALBANO ARIEL SILVA TORO, ILICH ALEXIS CHOPA ALDANA, CAMILO SAMMY SANDOVAL GODOY Y JUAN FRANCISCO GABRIEL NAVARRETE VÁSQUEZ**, como autores de los delitos de **asociación ilícita**, previsto y sancionado en los artículos 292 y 293 del Código Penal y de **receptación reiterada de vehículo**

motorizado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal en concurso medial o ideal impropio con el delito de **estafa reiterada**, tipificado y sancionado en el artículo 467 del Código Penal.

Además, se ha decidido, **CONDENAR** a **YERKO ANDRÉS SILVA TORO** y **JUAN FRANCISCO GABRIEL NAVARRETE VÁSQUEZ**, como autores del delito reiterado de **apertura de giros presentando datos o antecedentes falsos al Servicio de Impuestos Internos**, previsto y sancionado en el artículo 97 N° 23 del Código Tributario y a **YERKO ANDRÉS SILVA TORO** y **ALBANO ARIEL SILVA TORO**, como autores del delito de **lavado de activos**, tipificado y sancionado en el artículo 27 letra A) de la Ley 19.913; y como autores del referido ilícito de **lavado de activos**, en la hipótesis tipificada y sancionada en la letra B) de la disposición legal señalada, a **CAROLINA ANGÉLICA CORNEJO ARRIAGADA** y **VÍCTOR MANUEL QUEZADA BRAVO**.

Por último, se ha resuelto, **CONDENAR** a **DAVID ENRIQUE MILLALÉN LLANCAO**, como autor de **un delito de receptación de vehículo motorizado**, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal y del delito de **tenencia ilegal de arma de fuego**, previsto y sancionado en los artículos 2 letra b) y 9 de la Ley 17.798 y a **CAMILO SAMMY SANDOVAL GODOY** como autor de este mismo ilícito.

El tribunal tuvo presente para adoptar la decisión condenatoria antes referida, la abundante, variada, suficiente y pertinente prueba de cargo rendida, consistente, en términos generales, en testimonial, pericial, documental, videograbaciones, audios, interceptaciones telefónicas, fotografías y evidencia material, que permitió formar

convicción, más allá de toda duda razonable, para tener por acreditadas las premisas fácticas y arribar a las conclusiones jurídicas que por ahora se adelantan:

1.- Que, en cuanto al delito de **ASOCIACIÓN ILÍCITA**, el Ministerio Público presentó a juicio oral un caso denominado policial y comunicacionalmente "la industria del portonazo" y, efectivamente, las evidencias reunidas durante la extensa investigación, llevada a cabo, en primera instancia, por Carabineros de la Sección de encargo y búsqueda de vehículos y seguida por un grupo o fuerza de tarea especial de la Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte de la PDI, y que fueron incorporadas en audiencia, demostraron fehacientemente que los acusados **Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana, Camilo Sandoval Godoy y Juan Navarrete Vásquez**, se organizaron para desarrollar un sofisticado y lucrativo plan delictual consistente en vender vehículos producto de robos, la mayoría de ellos, con intimidación o violencia, conocidos popularmente como "portonazos" o "encerronas", previa reinscripción como vehículos nuevos y sin uso en el Registro Civil, obteniendo nuevas placas patentes, utilizando para ello, facturas de empresas automotoras falsas o "de papel" en las que se modificaban los números de motor y chasis de los móviles, así como se adulteraban materialmente dichas series en sus estructuras, para hacerlas coincidir, proceso que conllevaba el "blanqueamiento" de su origen espurio dándole una apariencia de licitud. De esta manera, se ocultaba o disimulaba la verdadera identidad del móvil, con la finalidad de venderlo en el mercado automotriz formal, principalmente, en plataformas de internet o redes sociales

dedicadas al rubro, estafando a terceros compradores de buena fe en montos superiores a 40 UTM.

2.- Que, como se ha visto, la organización formada por los acusados y otros integrantes, que ya fueron condenados, tenía por objeto **la comisión de delitos de RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y ESTAFAS**, los que fueron perpetrados de manera reiterada y sostenida en el tiempo, desde el mes de marzo del año 2017 hasta el 16 de octubre de 2020, fecha en que se ejecutaron las órdenes judiciales de entrada y registro a los domicilios de sus miembros y estos fueron detenidos.

3.- Que, los acusados, dentro de las actividades de la asociación, tenían asignadas ciertas tareas y desplegaban diversas acciones en las distintas etapas del engranaje delictivo. En primera instancia, existía una fase de carácter administrativo, vinculada a la creación de empresas automotoras falsas, en la plataforma del Ministerio de Economía "empresa en un día" y posterior iniciación de actividades ante el SII y la emisión de facturas, así como, la inscripción de los vehículos robados como nuevos y sin uso, con dichos documentos tributarios, en las oficinas del Registro Civil donde se otorgaban nuevas placas patentes.

En segundo lugar, y paralelamente, se desarrollaba el proceso operativo, que implicaba la adquisición del vehículo producto de robo y su modificación o transformación física, a través de la adulteración del vin o chasis y/o número de motor en su estructura y/o en los stickers o adhesivos con que las diferentes marcas registraban estas series identificatorias en lugares estratégicos.

Estas operaciones se verificaban al tiempo que se inscribía el vehículo con la factura que contenía los números adulterados coincidentes con los restampados físicamente, distintos a los reales, configurando así la nueva identidad del vehículo que se plasmaba en las placas patentes únicas que se obtenían, replicada en los documentos respectivos, vale decir, certificados de homologación de revisión técnica, permiso de circulación, seguro obligatorio de accidentes personales, padrón, etc.

Posteriormente, el móvil así "blanqueado" con apariencia de licitud era comercializado, mediante su publicación y oferta en el mercado automotriz formal, su exhibición a terceros interesados y eventuales compradores, vendido y entregado a personas, que de buena fe lo compraban y pagaban el precio generalmente en efectivo, por sumas que en todos los casos, al menos, superaban las 40 UTM.

4.- Que, fue así como, en el contexto del proceso descrito llevado a cabo por la asociación, los acusados **Yerko Silva Toro y Juan Navarrete Vásquez** cometieron el **delito reiterado de declaración inicial de actividades proporcionando antecedentes y datos falsos al SII con el fin de obtener autorización para documentación tributaria**, específicamente, facturas, en relación con las empresas que crearon utilizando testaferros o "palos blancos" como socios, delito en el que participaron en calidad de autores, respecto de algunas de estas sociedades automotoras y en distintos períodos de tiempo, así como también lo hicieron otros integrantes, a saber, Sebastián Martínez Zavala y Franco Cruz Iligaray.

En efecto, se acreditó con los testimonios de los oficiales de caso y de funcionarios del SII, que se condicen con las evidencias materiales documentales, levantadas en los domicilios de Navarrete y Martínez Zavala, e información aportada por las Notarías, testimonios de notarios y con el contenido audiovisual e imágenes extraídas del celular de Yerko Silva, que los acusados se involucraron en la creación de algunas sociedades automotoras, poniendo a "palos blancos" que reclutaban como socios por un pago monetario, indicando domicilios inexistentes o que no correspondían, con aportes de capital falsos, y para el único fin de iniciar actividades y obtener facturas, lo que hacían a través de las plataformas de internet del Ministerio de Economía y del Servicio de Impuestos Internos abiertas al público.

5.- Que la modificación de las series de chasis y/o de motor en los vehículos, la realizaba Aimel Gavilán Caro, que prestaba sus servicios especializados a la asociación como mecánico "tatuador", quien también se encuentra condenado, y mantenía contacto directo con los acusados Yerko Silva Toro y Camilo Sandoval Godoy; y el encargado de imprimir los stickers o adhesivos con las series adulteradas era Roberto Bascur Arancibia, quien declaró en el juicio reconociendo su participación, previo encargo e indicaciones de Camilo Sandoval Godoy al efecto, corroborado por la evidencia levantada desde su domicilio, consistente, entre otra, en un computador donde constaban los correos electrónicos y archivos con los modelos de stickers que recibía y los que confeccionaba.

6.- Que, en lo que dice relación con tareas posteriores, a saber, la reinscripción fraudulenta de los vehículos robados y consecutiva exhibición y venta de estos a través de maniobras engañosas a compradores de buena fe, que eran estafados, participaban **Albano Silva Toro, Camilo Sandoval Godoy y Juan Navarrete Vásquez**, así como otros miembros que se encuentran actualmente condenados, como Edith Silva Sánchez y Fredy Miranda Arana, además de Tatiana Arana Espinoza (QEPD), quienes, además, reclutaban testaferros o "palos blancos" para que figuraran como primeros adquirentes de los vehículos reinscritos y/o solicitantes de dicha inscripción, por un pago de sumas menores de dinero, entre otros, Luis Astudillo Peña, Jorge Salinas Uribe, Nelson Méndez Moya, José Alfredo Paredes Quevedo, José Raiman Cordero, Carlos Gómez Zúñiga, Marcos Supanta Aguilera, Jonathan Pérez Pérez y Leonidas Hernández Concha.

En lo que respecta a las ventas fraudulentas, también participaba **Ilich Chopa Aldana**, y todos aquellos que vendían los vehículos, recibían el dinero, por lo general, en efectivo y en algunas ocasiones en un vale vista o cheque que era cobrado en esa misma oportunidad, y excepcionalmente, mediante transferencia a alguna cuenta bancaria, dinero que era recibido finalmente por Yerko Silva Toro, a través de cuentas de terceros, como su ex pareja Claudia Sandoval Godoy, Daniela Espinoza Toro y Jeannette Toro Bremen, su hermana y madre, respectivamente, o bien directamente en efectivo por Claudia Sandoval Godoy.

7.- Que, la organización contaba con una estructura jerárquica, siendo su jefe y líder, **Yerko Silva Toro**, quien

dirigía la empresa delictiva desde las unidades penales en las que estuvo privado de libertad durante todo el período de su existencia. Así quedó de manifiesto, de manera irrefutable, en las escuchas telefónicas de conversaciones entre los miembros de la asociación, en los múltiples audios y mensajería de WhatsApp obtenidos de su celular, entre Silva Toro con su hermano Albano, Claudia Sandoval, Tatiana Arana, Fredy Miranda y Juan Navarrete, los que formaban parte de su círculo de confianza, quienes actuaban bajo sus órdenes y directrices, le rendían cuentas de las labores y trámites que realizaban y, además, estaban enrolados en los penales y lo visitaban presencialmente de manera periódica.

En el caso de **Ilich Chopa Aldana y Camilo Sandoval Godoy**, la evidencia levantada de sus respectivos teléfonos celulares, demostró los contactos existentes entre ellos relativos al giro delictual de la asociación, siendo un hecho de la causa, afincado por los dichos de los propios acusados Yerko Silva e Ilich Chopa y, por otros coimputados, como Tatiana Arana, quien en esa época era pareja de Camilo Sandoval, y su hijo Fredy Miranda; que Yerko Silva conoció a Ilich Chopa mientras ambos estaban recluidos en el penal Santiago 1 de esta ciudad, donde éste último le propuso la idea del emprendimiento delictual y le enseñó el modus operandi, de manera que iniciaron juntos el negocio ilícito que devino en la organización criminal o asociación materia del presente juicio, en la medida que Yerko aportó el capital e Ilich los conocimientos, experiencia y contactos.

No obstante **Yerko Silva Toro** ejercer funciones de jefatura y manejar los dineros obtenidos de las actividades

ilícitas de la asociación, los acusados **Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana, Camilo Sandoval Godoy y Juan Navarrete Vásquez**, siendo personas cercanas y de confianza (familiares y amigos), entre otros integrantes, ya sea de forma permanente desde su inicio, en determinados períodos o con algunas intermitencias, formaron parte de la cúpula ejecutiva o estructura apical de la asociación, en el entendido que es una característica de las asociaciones ilícitas su estabilidad y permanencia como organización en tanto que sus miembros pueden ir rotando dado su carácter fungible.

En efecto, los acusados nombrados ejercieron un rol preponderante en la organización criminal como quiera que se acreditó, por las declaraciones testimoniales de funcionarios policiales, las evidencias extraídas de los teléfonos celulares de los acusados y las grabaciones de escuchas telefónicas que desarrollaban imprescindibles y relevantes labores, ya que en términos generales, se encargaban de reclutar a testaferros por un pago, realizar con ellos trámites notariales o en el Registro Civil, en ocasiones, proveían de medios para guardar los vehículos, exhibirlos y venderlos, destacando la función de recibir los dineros de las ventas y distribuirlo conforme a las indicaciones de la jefatura. En consecuencia, el carácter de aquellos igualmente se encuadra en la hipótesis del inciso primero del artículo 293 del Código Penal.

8.- Que los hechos que, en forma sintética se han relatado, constituyen el delito de **ASOCIACIÓN ILÍCITA**, al concurrir todos los elementos de dicha figura, tipificada y sancionada en los artículos 292 y 293 inciso primero del

código punitivo, vale decir, en lo que concierne al presente caso: a) organización formada por una pluralidad de personas, b) su permanencia o estabilidad en el tiempo y c) que tenga entre sus fines la comisión de **hechos constitutivos de crímenes**.

Particularmente, concurre el último requisito dado que, conforme al artículo 456 bis A inciso quinto del Código Penal, en los casos de reiteración en la receptación de vehículos motorizados, imperativamente debe aplicarse la pena privativa de libertad establecida en el inciso tercero, aumentada en un grado, vale decir, presidio mayor en su grado mínimo, siendo ésta la pena base en abstracto de los delitos de receptación reiterados cometidos con motivo u ocasión de la asociación. Dicho de otra forma, conforme a la regla legal citada, la receptación reiterada, atendida la conminación legal abstracta asociada a ella, constituye para estos efectos un crimen.

9.- Que, asimismo, las acciones y actividades relatadas dan cuenta de los objetivos de la asociación, como se señaló, la perpetración de hechos constitutivos, en primer lugar, del delito de **RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO**, en diversas modalidades comisivas, vale decir, **la compra de vehículos motorizados robados**, a sabiendas de su origen espurio; **la tenencia de los mismos**, en la medida que se guardaban los vehículos y se mantenían bajo el poder de miembros de la asociación quienes también los usaban, ejemplo de ello, son los casos en que se fiscalizaron e incautaron en circulación mientras eran conducidos por algún miembro, y, finalmente, la venta de estos en el mercado automotriz formal

con una nueva identidad, concretando el fin último de la asociación.

Cabe señalar que los delitos base, no obstante no ser una cuestión controvertida sino más bien reconocida por los acusados que declararon, en todos los casos, se encuentran acreditados con los respectivos encargos policiales adjuntos a las denuncias formuladas por las víctimas de los hechos, los testimonios directos de éstas en juicio y/o de los funcionarios policiales que recibieron las denuncias correspondientes.

En segundo lugar, respecto del delito de **ESTAFA previsto en el N° 1 y en el inciso final del artículo 467 del Código Penal**, los acusados una vez "blanqueado" el vehículo con sus números identificatorios modificados, planificaban y ejecutaban una puesta en escena, para efectos de publicarlo en las plataformas de venta de autos o redes sociales, coordinar las visitas y contactos con los interesados, y posteriormente venderlos. De este modo, preparaban el vehículo con los documentos adulterados y en algunos casos falsificados para que coincidieran con la patente y series de vin y motor, tales como, el permiso de circulación y certificados de homologación, todo con la finalidad de engañar al comprador y defraudarlo en la calidad de la cosa transferida, induciendo a las víctimas a incurrir en error acerca de dicha calidad, ya que confiaban en la legalidad de la compraventa respecto de un vehículo semi nuevo de origen lícito, quienes tomaban los resguardos necesarios y suficientes para así constatarlo, incurriendo en desembolsos cuantiosos o disposiciones patrimoniales, siendo perjudicados

finalmente en sumas superiores a 40 UTM e incluso en algunos casos el perjuicio excedió de 400 UTM, verificándose con ello los elementos objetivos del tipo penal de la estafa.

Todo ello fue probado, entre otros elementos de convicción, principalmente, a través de los numerosos testimonios de las víctimas, que relataron ante el tribunal, de manera detallada, los hechos que les afectaron, la incredulidad al ser informados por funcionarios policiales que el vehículo que habían comprado tenía encargo por robo y, con notable elocuencia, las circunstancias de la incautación y la consecuente pérdida del vehículo y, con ello, el perjuicio económico sufrido.

10.- Que, ahora bien, acorde con la prueba rendida, las alegaciones de los intervinientes y los hechos que se han dado por asentados, el tribunal, siguiendo la doctrina de los autores Mario Garrido Montt, Politoff y Ortiz Quiroga, constató la concurrencia de una **concurso material medial o ideal impropio** entre los delitos de receptación y estafa, pues a pesar de no existir entre ellos unidad de acción sino que se trata de acciones sucesivas que pueden separarse, se encuentran conectados ideológica e irreductiblemente, conforme al plan delictual de la organización, cual era en rigor lucrar con la venta de vehículos robados con apariencia de licitud, existiendo, por ello, plena coincidencia entre el objeto material de uno y otro, esto es, el vehículo robado.

En otras palabras, atendido el plan criminal de la asociación ilícita, la receptación de vehículo motorizado es el medio necesario para la perpetración del delito de estafa, conforme a lo previsto en el artículo 75 del Código Penal.

Por la misma razón, debe desestimarse en la especie la concurrencia de un delito continuado.

11.- Que, en lo que concierne al delito de **LAVADO DE ACTIVOS**, las importantes ganancias en dinero y bienes obtenidas de las ventas fraudulentas y actividades delictivas propias de la asociación, fueron objeto de diferentes maniobras ejecutadas por el líder de la asociación **Yerko Silva y su hermano Albano**, las que serán enumeradas y descritas a continuación, con el propósito de ocultar o disimular su origen ilícito, logrando así disociar el dinero de su fuente ilícita e introducirlo al sistema económico formal mediante actividades comerciales lícitas, la adquisición de bienes y la realización de inversiones que no tenían justificación en función de los ingresos formales y patrimonio que registraban en los organismos competentes.

En efecto, la información aportada por el Servicio de Impuestos Internos, los testimonios de los funcionarios de la Brigada de lavado de activos de la PDI y del Dpto. OS7 sección lavado de activos de Carabineros, y de los oficiales de caso que reportaron las diligencias y declaraciones de miembros de la asociación, en que participaron, permitieron acreditar, sin margen de dudas, en primer lugar, que **Yerko Silva Toro** usaba cuentas bancarias de terceros, específicamente, de familiares, su pareja y de testaferros, entre las cuales se realizaban frecuentes traspasos de diversas cantidades así como remesas de éstas hacia otras cuentas, disimulando el origen ilícito de los fondos gestionados a través de ellas.

De igual modo, la prueba de cargo señalada, permitió verificar, en segundo lugar, la existencia y funcionamiento del restaurante "Alto Machu Picchu", ubicado en Gladys Marín 6106 de Estación Central, cuyo dueño y administrador era Albano Silva, local comercial que, además de servir a la asociación para realizar algunas de sus operaciones, era utilizado por los hermanos Silva Toro, para ingresar dinero y bienes provenientes de aquélla, los que constituyeron, en abril de 2018, la sociedad "S y B", valiéndose de sus respectivas parejas como socias, para administrar el restaurante "Parilla del Guacho" continuador de "Alto Machu Picchu".

De este modo, el local comercial fue remodelado, a pesar de no generar utilidades y mantener deudas millonarias en arriendo -como fue reconocido por Albano Silva y corroborado por el dueño de la propiedad y arrendador Clodomiro Silva Núñez-, ejecutándose mejoras para transformarlo en un nuevo restaurante con una especialidad de comida distinta, con recursos aportados por Yerko Silva Toro a través de Claudia Sandoval, en la misma época en que, a través de la sociedad ya mencionada, los acusados adquirieron un inmueble que se pagó en efectivo y no se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Por último, Albano Silva Toro, adquirió un segundo inmueble, que pagó con un vale vista, tomado a su nombre como beneficiario por un tercero, y que fue transferido al poco tiempo a una sociedad que había sido constituida recientemente para ese único fin, y también efectuó una cuantiosa compra de moneda extranjera.

Todas aquellas actividades comerciales y financieras, constituyen maniobras de lavado de activos de la letra A) del artículo 27 de la Ley 19.913, en la medida que, en el caso en examen, se asentó la concurrencia de los elementos del tipo de dicha figura, vale decir, que Yerko y Albano Silva Toro, las ejecutaron para ocultar y disimular el origen ilícito de los dineros, sabiendo que provenían directamente de alguno de los delitos precedentes enumerados en la disposición legal, ya que se trataba de los ingresos y ganancias de las estafas que estaban perpetrando en el contexto de la asociación ilícita a la que pertenecían.

12.- Que, respecto del delito de **LAVADO DE ACTIVOS de la letra B) del artículo 27 de la Ley 19.913, atribuido a los acusados Quezada y Cornejo**, es un hecho no controvertido y que además fluyó de la prueba de cargo, que entre los años 2016 y 2018, Carolina Cornejo Arriagada, en su calidad profesional de contadora, administró el restaurante "Alto Macchu Picchu" y, por tanto, era una persona cercana y de confianza de Albano Silva y su señora Paula Becerra.

En este contexto, durante los años 2017 y 2018, en pleno auge de las actividades ilícitas de la asociación, los acusados Silva Toro utilizaron cuentas bancarias de terceros, entre ellas, las que pertenecían a Carolina Cornejo y su pareja Víctor Quezada -en ese entonces oficial activo de la PDI-, quienes conociendo el origen ilícito de los dineros al momento de recibirlos, facilitaron sus cuentas bancarias para recibir numerosas y periódicas transferencias o depósitos en efectivo, para posteriormente y de la misma manera devolver a

las cuentas de Albano Silva y de empresas asociadas al restaurante, quedándose ellos a su vez con parte del dinero.

Lo anterior se probó con las cartolas de movimientos, correspondientes al período señalado, de cada una de las cuentas implicadas, que fueron analizadas por los especialistas de la Brigada de lavado de activos, y con los informes de análisis patrimonial y financiero de Albano Silva, sus sociedades y de los acusados Cornejo y Quezada, reportados por los funcionarios ejecutores y corroborados con prueba documental, antecedentes que permitieron tener por acreditados los traspasos de dinero y su periodicidad, entre las cuentas de Víctor Quezada Bravo del Banco Estado y del Scotiabank, y las cuentas de Albano Silva, de su empresa y de Diego Sepúlveda Guzmán quien se la facilitó, quedando un saldo a favor del acusado Quezada, por un monto considerable, que no tiene justificación. A su vez, entre la cuenta bancaria del Banco Estado de Carolina Cornejo Arriagada y las cuentas de Albano Silva Toro y de la empresa del mismo, también quedando a favor de la primera una importante suma de dinero.

Ahora bien, los montos transferidos no se condicen con los ingresos formales de Albano Silva Toro como persona natural ni con los ingresos propios del restaurante, dado que según la información proporcionada por el SII, el local no presentaba ganancias, y por otro lado, tampoco concuerda con la remuneración de los acusados Cornejo y Quezada ni con su situación financiera y patrimonial, cuestión que por sí sola es suficiente para descartar la explicación dada por Carolina Cornejo al declarar en juicio, en orden a que le prestaba

dinero al restaurante para que pudiera seguir funcionando, el que después le era devuelto, generándose un flujo de dinero entre las cuentas propias y de su pareja y las de Albano y del restaurante.

Sin perjuicio de ello, también se probaron una serie de indicios serios, graves y concordantes, que permitieron establecer la faz subjetiva del delito, en la medida que los acusados actuando con ánimo de lucro, recibían el dinero en sus cuentas, manteniendo y adquiriendo parte del mismo con conocimiento y conscientes de su origen ilícito.

Para así determinarlo, entre otros indicios, el tribunal tuvo especialmente presente la ausencia absoluta de registro de los dineros que supuestamente Carolina le facilitaba al restaurante y que, a su vez, el restaurante le restituía, y la falta de respaldo de las supuestas compras de insumos y pagos a proveedores y/o trabajadores en que utilizaba dicho dinero, es más, en su declaración se limitó a señalar que los respaldos eran las facturas de los proveedores y que los dineros que ella prestaba estaban considerados en las compras y ventas del ejercicio. Por lo que debe entenderse, paradójicamente, que el único registro que existía de los flujos o traspasos entre los acusados y Albano Silva, está constituido precisamente por las cartolas bancarias que no tienen ningún atributo explicativo.

A ello se suma, la evidencia levantada correspondiente a la aplicación "telegram", en que, una vez producida la detención de los acusados Albano Silva y Paula Becerra, Carolina y su pareja Víctor Quezada conversaban preocupados por la investigación e inminente formalización, comentando

ella "que investiguen todo porque no tiene nada que ocultar", ante lo cual, Víctor le contesta "no seas inocente", de lo cual se infiere que Víctor sabía que si la fiscalía los investigaba y se levantaba el secreto bancario, quedarían en evidencia los flujos y los dineros recibidos en sus cuentas, cuestión que les acarrearía serios problemas.

En fin, no deja de ser también altamente indiciario el hecho de que Carolina Cornejo, siendo contadora de profesión y con conocimientos especializados en cuestiones referidas a la administración de recursos monetarios ajenos, primero, haya comprometido en el negocio que administraba dineros propios y de su pareja, sin que éste se haya enterado, y, segundo, sin adoptar ningún resguardo, registro o respaldo para justificar los flujos de dinero con Albano Silva, pese a que se trató de montos considerables. En su declaración no hubo ninguna explicación plausible al respecto, resultando inverosímil inferir o suponer que ello se debiera al compromiso que tenía con los trabajadores y a la relación de confianza con Albano Silva.

13.- Que en lo que dice relación con el delito de **RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO**, respecto del Station Wagon marca Nissan, modelo Qashqai, de color blanco, patente LPHB.53, es un hecho de la causa que el acusado **David Millalén Llancao**, fue controlado y detenido por funcionarios de la PDI a bordo de dicho vehículo como conductor, el día 23 de enero de 2020, en la vía pública, suceso que fue reconocido por el acusado Millalén, pero negando haber tenido conocimiento de que se trataba de un vehículo robado y adulterado. En consecuencia, la cuestión controvertida quedó

circunscrita a la existencia del elemento subjetivo del tipo del conocimiento directo o indirecto del origen ilícito del vehículo que mantenía en su poder.

Por otra parte, con prueba documental introducida y el testimonio de la víctima del robo, sumado el encargo policial respectivo, se acreditó que el vehículo singularizado, fue reinscrito con una factura de la Automotriz Guillermo Morales SPA, una de las empresas automotoras de papel utilizadas por la asociación, y se logró determinar la placa patente real, KYDV.97, asociada a un vehículo de las mismas características que tenía encargo por robo.

El acusado Millalén intentó justificar la tenencia del vehículo robado, señalando que Juan Navarrete -a quien conoce de niño por ser amigo del padre y además por ser vecino- le pidió el favor de mostrar el móvil que tenía estacionado afuera de su casa, a un tercero que estaba interesado en comprarlo, a quien le entregó su número para que lo contactara, versión consistente con la señalada por el oficial de caso y con lo declarado por Juan Navarrete.

Sin embargo, para el tribunal dicha explicación no es creíble ni verosímil, desde que Millalén sabía que el vehículo no era de Juan Navarrete, y aceptó exhibirlo a un tercero, sin indagar quién era el dueño y sin constatar si el vehículo tenía los documentos, cuestión que es esencial al momento de ofrecer y exhibir un vehículo para la venta y finalmente, porque a pesar de que el interesado tenía su número de celular y se comunicó con él confirmándole su asistencia al lugar acordado, éste no concurrió, habiéndolo esperado más de 1 hora, según su relato; indicios que,

sumados a los audios de Yerko del mismo día, en que se refiere a la pérdida del vehículo a cargo del "primo" de Juanito, aludiendo a Millalén, conducen de manera lógica e inequívoca a la conclusión de que el acusado Millalén Llancao, fue reclutado por Navarrete por un pago a fin de mostrar el vehículo a un futuro comprador, como era la forma normal de operar de la asociación y, por ende, sabía o no podía menos que saber el origen espurio del móvil.

Respecto del delito de **TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO**, en el contexto de la ejecución de la orden de entrada y registro al domicilio de **David Millalén Llancao**, ubicado en Sara Gajardo N° 6449, comuna de Cerro Navia, el día 16 de octubre de 2020, según los testimonios contestes de los oficiales de la BIRO René Juárez Maureira y Cristóbal Soto Figueroa, que realizaron la diligencia, encontraron en el dormitorio del encausado el armamento y menciones que se pasa a describir: 1.- un revolver Taurus, calibre 38 mm con 6 cartuchos en su interior del mismo calibre; 2.- una pistola marca CZ, calibre 9 mm con 12 cartuchos del mismo calibre; 3.- una pistola Brevette, calibre 32 mm con 7 cartuchos del mismo calibre; 4.- 25 cartuchos calibre 9 mm, un cartucho calibre .57 magnum, un cartucho calibre .357 Winchester, un cartucho de escopeta calibre 20 mm y dos cartuchos de escopeta calibre 16 mm, los que fueron analizados por el perito armero Jaime Olguín Leiva, apoyado en fotografías, el que determinó que todos eran aptos para el disparo, y consultada la Dirección General de Movilización Nacional, el acusado no tenía armas inscritas a su nombre ni contaba con autorización para portarlas. Por su parte, el propio acusado

al prestar declaración en juicio, corroboró la tenencia de las armas y municiones y que no contaba con los permisos correspondientes.

Además, en este caso, concurre la agravante especial, contemplada en el artículo 12 de la Ley 17.798, al haber cometido el delito con más de dos armas de fuego.

En lo que concierne a la tenencia de municiones, el tribunal ha decidido absolverlo, en atención a que de los 30 cartuchos que mantenía aparte de las armas cargadas con munición en su interior, 25 cartuchos eran de calibre 9 mm, es decir, compatibles con la pistola marca CZ del mismo calibre.

Así las cosas, al no haber duda respecto de la coincidencia en el calibre de la mayoría de las municiones y de las armas, y teniendo presente que de los otros 5 cartuchos restantes, tres eran de escopeta de perdigón múltiple, por lo que su peligrosidad resultaba marginal o irrelevante para el bien jurídico protegido, se concluyó de forma unánime por el tribunal que, en este caso, el injusto de la tenencia de las municiones se subsume en la tenencia de las armas de fuego, lo que constituye en rigor un concurso aparente de leyes penales, que se resuelve a través de la aplicación del principio de consunción o subsunción, en la medida que el disvalor del delito de tenencia ilegal de municiones aparece subsumido por el delito de tenencia de arma de fuego, pues éste último absorbe el disvalor o la reprobación jurídica del primero.

14.- Que, en cuanto al delito de **TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO atribuido a Camilo Sandoval Godoy,** al igual que

en el caso anterior, en el marco de la ejecución de la orden de entrada y registro a su domicilio, ubicado en los Arrayanes N° 6850, en la comuna de Lo Prado, el día 16 de octubre de 2020, según los testimonios contestes de los oficiales de la PDI Diego Caroca Donoso, Leonardo Colipán Bravo, Francisco Saavedra Cerda y Paulina Norambuena Sepúlveda, que llevaron a cabo la diligencia, encontraron en el segundo piso donde residía el encausado, encima de la mesa del comedor, un revolver marca Taurus calibre 32 mm, con seis cartuchos en su cargador, además, de unos walkie talkie, celulares y en una mochila, un inhibidor, antenas, guantes y una baliza.

Examinados el armamento y las municiones por el perito armero Jaime Olguín Leiva, apoyado en fotografías, se estableció que eran aptos para el disparo, y consultada la Dirección General de Movilización Nacional, el acusado no tenía armas inscritas a su nombre ni contaba con autorización para portarlas.

Si bien el acusado Sandoval Godoy no prestó declaración y su defensa pretendió atribuirle la tenencia del arma al amigo que se encontraba en su domicilio, al momento del allanamiento, el tribunal estimó que se encontraba plenamente probado el delito y la participación de Sandoval, en primer lugar, porque el arma estaba en su domicilio, en el segundo piso donde residía de forma independiente del 1er piso donde vivía su padre, a simple la vista sobre la mesa del comedor, ámbito privado del cual detentaba pleno control y dominio, como se demostró con las fotografías incorporadas y los testimonios ya referidos, y en segundo término, porque estaba

junto a otros elementos conocidamente utilizados para cometer el delito de robo, tales como, inhibidores, balizas, walkie talkie, cuestión que necesariamente debe vincularse con las grabaciones de las escuchas telefónicas referidas a que Sandoval portaba armas de fuego y los audios e imágenes levantadas de su teléfono celular, incautado en un procedimiento por receptación de vehículo donde fue detenido, que contenía suficiente material audiovisual relativo a robos con intimidación o violencia de vehículos motorizados del tipo "encerronas", en que participaba junto con otros sujetos probablemente menores de edad.

Acorde con lo anterior, el arma de fuego cargada con municiones -aptos para el disparo y sin que el encausado la tuviera inscrita a su nombre-, hallada en la diligencia de entrada y registro verificada a su domicilio, es concordante y consistente con las actividades delictivas a las que se dedicaba.

15.- Que con los medios de prueba ya aludidos ha quedado establecida la participación que como autores, conforme a lo previsto en el artículo 15 N° 1 de Código Penal, les ha correspondido a los encausados en cada uno de los delitos por los cuales el tribunal ha decidido condenarlos, y en el caso de Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana, Juan Navarrete Vásquez y David Millalén Llancao, el tribunal, además, ha tomado en cuenta sus declaraciones prestadas en juicio, en la medida que dieron cuenta de hechos, situaciones y actividades que, con prescindencia del sentido y alcance o interpretación que les otorgaron, contribuyeron a formar convicción para asentar los

hechos punibles y sus intervenciones, por haber tomado parte en su ejecución de una manera inmediata y directa.

Menester es hacer presente que el tribunal consideró que la participación de Yerko Silva Toro en los delitos de receptación, estafa y apertura de giros con antecedentes falsos ante el SII, corresponde a la de autor directo, pues no obstante haber estado privado de libertad durante todo el período en que operó la asociación ilícita, lo que obviamente limitaba su margen de acción, igualmente manejaba el giro delictivo a distancia a través de su teléfono celular, como quedó de manifiesto con el análisis del contenido de éste, dispositivo que le permitía comunicarse con terceros para seleccionar y comprar vehículos robados, constituir empresas falsas y facturar, ofertar vehículos, negociar precios de venta y coordinar exhibiciones con interesados, acciones constitutivas de los delitos indicados que Yerko Silva realizaba personal y directamente; sin perjuicio que también actuaba como autor inductor conforme al N° 2 del artículo 15 del código punitivo, respecto de otras gestiones que en razón de su reclusión no podía efectuar de manera presencial, para cuya ejecución contaba con los brazos operativos de la asociación.

16.- Que en lo que concierne a los delitos de **ASOCIACIÓN ILÍCITA, RECEPTACIÓN Y ESTAFA** imputados a **Germán Duarte Pereira**, el Ministerio Público sostuvo en la acusación que con ocasión de la asociación ilícita, desempeñando funciones en ella, el acusado solicitó la primera inscripción y primera adquisición de diversos vehículos, y al menos participó activamente en las maniobras de engaño que

resultaron en la compraventa de un vehículo a la víctima de buena fe que, engañada de esta forma, adquirió dicho vehículo, pagando por éste y siendo perjudicada en un monto superior a las 40 UTM, siendo reconocido por la víctima junto a Tatiana Arana. Vehículo que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que éste había sido previamente sustraído y adulterado de la forma ya señalada.

Respecto de la imputación fiscal, lo primero que se debe señalar es que no se probó que Duarte Pereira formara parte de la asociación materia del presente juicio, por cuanto no existe ningún medio probatorio, ya sea, testimonial, documental, evidencia material, grabaciones de interceptaciones telefónicas, fotografías o audio de los celulares incautados de los demás acusados, en que aparezca, se le nombre o se haga referencia a que él haya realizado actividades o labores propias del rubro delictivo de la asociación, particularmente, que haya servido como "palo blanco" para la reinscripción de vehículos, en calidad de 1er adquirente o solicitante de 1ª inscripción. En consecuencia, no habiéndose acreditado su participación en el delito de asociación ilícita establecido en la causa, se le absolverá de los cargos formulados en ese sentido.

Lo que sí se probó respecto de Germán Duarte, mediante las declaraciones de los oficiales de caso, es que, sin ser un blanco investigado dentro de la asociación, su nombre surgió durante el curso de la investigación, vinculado específicamente a dos vehículos robados y reinscritos con

facturas de las empresas automotoras falsas en el marco de la asociación investigada, como segundo adquirente.

Se trata de los vehículos Kia, modelo Sportage, de color rojo fuego, PPU KVTB-46, cuya verdadera identidad fue determinada pericialmente y asociada a la PUU KXRF.65; y Mazda, modelo CX-5, de color blanco perla, PUU LCPX-63, cuya verdadera identidad fue determinada pericialmente asociada a la PUU KPZL.25; ambos con encargo vigente por el delito de robo con intimidación, conforme a los formularios que se adjuntan a las denuncias respectivas, y ambos comprados por Germán Duarte como segundo adquirente y vendidos por éste a terceros, pues señaló que por un tiempo se dedicó a la compraventa de vehículos, corroborado con los documentos justificativos de dichas compraventas, los documentos inherentes a los vehículos, las facturas y solicitudes de 1ª inscripción y de transferencia acompañadas en autos.

Ahora bien, que el acusado se dedicara a comprar y vender autos usados, aparece corroborado por los testimonios de descargo de su señora e hijo y, además, acompañó documentos correspondientes a la compraventa de otro vehículo en el año 2020.

Asimismo, el acusado declaró en juicio que fue víctima de estafa al comprar esos dos vehículos robados y clonados, ya que tomó los resguardos pertinentes, obteniendo el respectivo certificado de inscripción, un autofact con el historial de estos, e incluso concurriendo con los automóviles a una Comisaría de Carabineros para consultar las patentes, no teniendo ningún problema, por lo cual, procedió a la compra. También explicó que les pedía a los vendedores

que le dieran un poder notarial para vender los vehículos y así mantenerlos con un solo dueño a efectos de facilitar su comercialización, lo que constituiría una práctica habitual entre quienes se dedican a esta actividad comercial.

En ese contexto, respecto del primer móvil, el Kia Sportage, Duarte lo compró en enero de 2019 al 1er adquirente Juan Pablo Olivares Fuentes, quien para comprobarlo además acompañó copia de vale vista de 08.01.2019 tomado a favor del vendedor por \$ 11.000.000, y a los pocos días, lo vendió a Ricardo Zepeda Trigo, valiéndose de un poder otorgado por Olivares, dando el comprador un vehículo de su propiedad en parte de pago y una cantidad de dinero en efectivo.

Siendo un hecho no controvertido que el vehículo era robado y reinscrito con una factura de la Automotora Bilbao SPA, que correspondía a las usadas por la asociación ilícita, obteniendo una nueva identidad, la controversia se centró en determinar si Duarte tenía conocimiento del origen ilícito del vehículo y consciente de ello, procedió a la venta fraudulenta a un tercero de buena fe.

Para dicho efecto, el órgano acusador presentó el testimonio de la víctima en el juicio, quien concordando con Duarte señaló que éste tenía un poder de Juan Pablo, cuñado de Duarte según le comentó, el que le había dado el vehículo en parte de pago por la venta de una panadería. Agregó que le llamó la atención que cada 5 o 10 minutos lo llamaban por teléfono, indicando éste que era su señora y le mostró su foto en el celular. La víctima también señaló que no pudo sacar el permiso de circulación porque la patente no aparecía vigente para el pago, entonces, llamó a Duarte

insistentemente pero no contestó, le mandó correos y whatsapp pero nunca lo logró ubicar. Por último, expuso que reconoció al vendedor y a la mujer que le mostró en el celular en las fotografías que le exhibieron.

La declaración anterior y el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima del vendedor Germán Duarte y de su supuesta señora, Tatiana Arana, fueron corroborados por el oficial de caso Larry Caro.

Como se ha visto, el principal elemento incriminatorio que el Ministerio Público hizo valer en juicio, es el reconocimiento fotográfico efectuado por Ricardo Zepeda Trigo de Tatiana Arana Espinoza, brazo operativo de la asociación ilícita, identificándola como la mujer que vio en la imagen del celular de Duarte, siendo de tal relevancia que permitió al persecutor conectar a Duarte como miembro de la asociación desempeñando funciones en la venta de los vehículos robados.

La defensa cuestionó el valor probatorio de tal reconocimiento, en la medida que consideró que por la metodología aplicada y el tiempo transcurrido, no podía dar certeza de exactitud ni de corrección. Pues bien, el tribunal compartió el reproche de la defensa, partiendo de la base que Zepeda dijo haber visto una imagen de una mujer de cuerpo entero en el celular y cuatro meses después habría reconocido a la misma mujer en fotografías de rostro en blanco y negro, además, dio características física muy generales e incluso señaló que era parecida a la acusada Carolina Cornejo, de tez blanca y rubia, es decir, podría haber reconocido a cualquiera otra mujer con esa vaga descripción, de lo que se

sigue que la exactitud y certeza del reconocimiento es feble y susceptible de una alta probabilidad de error.

Por otra parte, es dable preguntarse ¿Por qué Germán Duarte tendría una fotografía de Tatiana Arana Espinoza en su celular? Y de haber sido así ¿qué necesidad tenía de hacerla pasar por su señora? Si se supone que estaba realizando una venta fraudulenta de un vehículo que sabía era robado, la lógica indica que habría tratado de no despertar sospechas ni entregar más información de la necesaria. Las interrogantes planteadas no encuentran respuestas en la escasa prueba rendida por el Ministerio Público en contra de Duarte.

Ahora bien, descartado el valor probatorio del citado reconocimiento, los dichos de la víctima en torno a que Duarte durante la venta estaba nervioso y lo llamaban reiteradamente para preguntarle cómo iba, no deja de ser una apreciación o percepción sensorial del observador. Por otra parte, si bien la víctima también dijo que al tener dificultades con la obtención del permiso de circulación, trató de comunicarse insistentemente con Duarte sin éxito, lo que resulta indiciario del conocimiento que podría haber tenido de la ilicitud del vehículo, y en consecuencia del propósito de engañar al comprador, ya que después de la venta desapareció, existiendo sospechas de la participación del acusado, atendido además las particulares circunstancias que rodearon la venta, lo cierto es que los dichos de la víctima sobre estos puntos no son suficientes ni satisfacen el estándar legal de convicción exigido para condenarlo como autor de los delitos en comento.

Con respecto al segundo vehículo, el Mazda CX-5, el acusado Duarte señaló que lo adquirió en febrero de 2019 a la 1ª adquirente Carolina Gallegos, vale decir, un mes después que el Sportage, también pidió un poder a la vendedora pero terminó inscribiéndolo a su nombre y a los dos meses, lo vendió a través de un poder otorgado a un amigo de su hijo de nombre Rodrigo, quien lo ofertó junto con otro amigo de nombre Martín, pero que personalmente concurrió a la venta incluso conversó con el comprador.

En este caso, a diferencia del anterior, el comprador Simón Díaz Santis, no prestó testimonio directo en juicio, sino que la testigo Raquel Forero, entrevistó a su pareja, Camila Gatica y el testigo Álvaro Pino, se refirió a la compra que hizo el Sr. Díaz, destacando que ninguno mencionó que Duarte haya estado presente durante la compraventa, realizándose el negocio con Rodrigo Vásquez, mandatario del dueño, a quien le entregaron el dinero.

El tribunal estimó que la prueba rendida por el Ministerio Público, constituida por testimonios de oídas, resultaba insuficiente para tener por acreditados los presupuestos fácticos de los delitos atribuidos, pues el testimonio de la supuesta víctima era esencial a fin de aclarar las circunstancias particulares de las maniobras de engaño que devinieron en el error, dado que en dichas actuaciones estuvieron involucradas dos personas que tampoco declararon, por lo que, existe duda razonable acerca del conocimiento que pudo haber tenido el acusado Duarte acerca del origen espurio del vehículo y, por ende, también acerca del propósito de estafar a terceros con su venta.

Consecuente con lo razonado, se le deberá absolver de los cargos formulados en su contra como autor de receptación y estafa respecto de los vehículos señalados.

17.- Que, respecto del delito de **ASOCIACIÓN ILÍCITA atribuido a David Millalén Llancao**, el tribunal advirtió que, al igual que en el caso del acusado Germán Duarte, las premisas fácticas que fundan la acusación no se acreditaron. En efecto, el Ministerio Público lo sindicó como quien obedecía instrucciones del imputado Juan Navarrete, bajo la dirección de Yerko Silva, y participaba en la exhibición y venta de autos robados junto a otros miembros de la asociación.

Respecto de la imputación fiscal, lo primero que llama la atención, es que se refiere a una pluralidad de vehículos robados, y que la participación de Millalén en la asociación ilícita materia del presente juicio, estaría dada por la exhibición y venta de ellos. Sin embargo, no se rindió prueba alguna, ya sea, testimonial, documental, evidencia material, grabaciones de interceptaciones telefónicas, fotografías o audios de los celulares incautados de los demás acusados, en que aparezca, se le nombre o se haga referencia a que él haya realizado actividades o labores propias del rubro delictivo de la asociación, particularmente, que haya exhibido y vendido vehículos con otros miembros.

Por el contrario, como ya se analizó en el numeral 13° de este veredicto, la receptación del vehículo Nissan Qashqai PPU LPHB.53, por el cual se le decidió condenar, resultó ser un hecho aislado y puntual, que si bien pudo perpetrarse en el contexto de la actividad ilícita de la asociación no lo

fue por alguien que fuese miembro de la misma y/o que tuviese conocimiento de su existencia. En consecuencia, no habiéndose acreditado su participación en el delito de asociación ilícita establecido en la causa, se le absolverá de los cargos formulados en ese sentido.

18.- Que, finalmente, en cuanto al delito atribuido a **Camilo Sandoval Godoy, de apertura de giros con antecedentes y datos falsos presentados al SII**, cabe señalar que los acusadores le atribuyen participación en la constitución e iniciación de actividades de la Automotora Bilbao SPA, pero no se describe el factum, o sea, cuáles serían las conductas desplegadas por el acusado en torno a los hechos constitutivos de este delito, sin perjuicio de aquella falencia del libelo acusatorio que bastaría para rechazarlo, no se rindió prueba alguna a su respecto aparte de la imagen de una factura de la citada empresa habida en su celular, evidencia que no guarda relación con los elementos típicos del delito en cuestión, razones por las cuales, se le absolverá de los cargos formulados.

A mayor abundamiento, la prueba rendida dio cuenta que la empresa Automotora Bilbao SPA, fue constituida por Sebastián Martínez Zavala por encargo y bajo las instrucciones de Yerko Silva Toro. Es más, no deja de ser llamativo que el acusador particular prácticamente no menciona a Sandoval en su clausura, pese a que hizo una detallada mención de las evidencias conectadas con la participación de cada uno de los acusados por el delito tributario en cuestión.

Las demás consideraciones que ha tenido presente el tribunal y las demás alegaciones que hayan formulado los intervinientes, serán expuestas y resueltas en la sentencia definitiva que será redactada por la Magistrada Marcela Nilo Leyton.

La audiencia de comunicación del fallo se efectuará el **día 23 de diciembre del año en curso a las 13:30 horas**, sin perjuicio de la posibilidad de adelantar la fecha de la audiencia referida, caso en el cual los intervinientes serán oportunamente notificados.

Resolvió la sala integrada por el los jueces don Eduardo Gallardo Frías, doña Alejandra Rodríguez Oro y doña Marcela Nilo Leyton.